

NÚMERO: 182 / 2020

 Unidad Administrativa
**Área de Gestión de la
 Contratación**

Exp.: ECON/000084/2020

Resolución de la *Consejera Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid*, por la que se procede a declarar la emergencia en la tramitación del expediente denominado **“SERVICIO DE SOPORTE DE LA PROTECCIÓN DE CYTOMIC EPDR, POR TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA”**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas según lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, y de conformidad con lo que establecen los *Artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y demás disposiciones de aplicación y vista el informe de la Dirección de Ingeniería, Soporte a Gestión de Aplicaciones y Centros de Competencia ,

RESUELVO

1. Declarar la Emergencia en la tramitación del expediente de contratación, conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el **SERVICIO DE SOPORTE DE LA PROTECCIÓN DE CYTOMIC EPDR, POR TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA**, por los motivos que se indican a continuación:

Con fecha 31 de enero de 2020, la OMS declaró el brote de SARS-CoV-2 como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Los primeros casos en la Comunidad de Madrid se confirmaron el 26 de febrero. Desde esa fecha hasta la actualidad el ascenso en el número de casos confirmados ha sido exponencial y según los modelos dinámicos para predecir la onda epidémica del COVID-19, si no se toman medidas de distanciamiento, el número de casos confirmados podría ascender a una cifra difícilmente asumible.

De acuerdo con lo previsto en el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, las distintas Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

A tal efecto en el BOCM núm. 59, de 10 de marzo, se hizo pública la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del (COVID-19).

En la citada Orden se ha dispuesto una serie de recomendaciones en el ámbito laboral, tales como la promoción por parte de las empresas para que se realice la actividad laboral mediante el sistema de teletrabajo, la elaboración y actualización, en su caso, de planes de continuidad de actividad de la empresa donde se prevean las actuaciones a llevar a cabo ante la situación originada por el coronavirus (COVID 19), y el fomento de las reuniones por videoconferencia.

Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 67). Una de las cuestiones principales que esta situación está poniendo de manifiesto es la necesidad de asegurar la dotación de equipamiento y soluciones para teletrabajo.

El artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, establece que la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. De acuerdo con esta previsión, a todos los contratos que hayan de celebrarse para atender las



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1258505097279406759015**

necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.

Todo ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP, que regula un régimen excepcional de actuación para el caso de que la Administración tenga que actuar de manera inmediata ante situaciones críticas, justifica la contratación mediante tramitación de emergencia del Servicio soporte protección CYTOMIC EPDR, con el fin de securizar los dispositivos propios de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid que no tengan equipos corporativos para conectarse a los sistemas de la Comunidad de Madrid y, así, poder realizar teletrabajo, evitando la paralización de servicios esenciales prestados por la Comunidad.

Es por ello por lo que, teniendo en cuenta la imposibilidad de llevar a cabo la prestación del servicio mediante tramitación ordinaria o urgente, es necesario dar respuesta de manera eficaz y con las garantías requeridas, evitando así causar perjuicios en la prestación del servicio público.

La tramitación de emergencia que se acuerda se fundamenta, por consiguiente, en la imperiosa y urgente necesidad de contar con los servicios descritos para cubrir las necesidades críticas manifestadas, justificación suficiente para la aplicación de la tramitación de emergencia, tanto desde el punto de vista formal como material.

2. Ordenar la ejecución de las actuaciones necesarias para adoptar las medidas pertinentes con la finalidad de securizar los dispositivos propios de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid que no tengan equipos corporativos para conectarse a los sistemas de la Comunidad de Madrid y, así, poder realizar teletrabajo. El plazo de ejecución es de tres meses.
3. Proceder a la contratación del servicio referido de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria:

CONCEPTOS	TOTAL
BASE IMPONIBLE	21.690,00 €
IVA 21%	4.554,90 €
IMPORTE TOTAL, IVA INCLUIDO	26.244,90 €

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA